

Introducción a: De la emergencia a la estrategia. Más allá del “alivio a la pobreza”, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2004.

I. Del análisis social a la propuesta política¹

Los trabajos aquí compilados fueron escritos o pronunciados entre 1989 y 2003, cuando América Latina experimentaba el yugo ideológico del neoliberalismo, con sus reformas y falsas promesas de liberación a manos del mercado global. Han sido seleccionados pensando en quienes, como profesionales, técnicos o actores sociopolíticos, proponen e intervienen en el terreno de las políticas sociales y de la promoción de la economía popular. Varios de ellos son resultado de un diálogo sostenido durante ese período con estudiantes, docentes o profesionales del Trabajo Social. Aunque en algunos casos se hace referencia específicamente a Argentina o a Ecuador, en general predomina la perspectiva de ese mosaico de situaciones y coyunturas que llamamos América Latina, sufriendo las políticas y la acción ideológica del proyecto conservador.

Tienen como antecedente otros trabajos asociados a la búsqueda de alternativas propias para la región y a la constatación de la dificultad generalizada para comprender la economía popular y su potencial para el cambio social.²

Se enfatiza la problemática social urbana, en una época en que el reinado del mercado dejó a las ciudades sin rumbo, pero las propuestas y conceptos tienen una validez más general. De hecho, la política social en las ciudades, que fue hinchándose junto con la urbanización de la pobreza en ese período, nunca dejó de tener una matriz común con los programas dirigidos a la pobreza rural.³

Los trabajos están enmarcados en una visión crítica de la sociedad posmoderna y de las ideas conservadoras que pretenden legitimarla como estado natural (“pobres habrá siempre”). Pero sobre todo afirman que podemos y debemos explorar los caminos concretos de una transformación social posible desde la perspectiva de las mayorías. Y que toda transformación significativa requiere programas de acción colectiva –desde el estado y las organizaciones y movimientos sociales- que reorienten las prácticas dentro de visiones y estrategias compartidas. El cambio estructural como emergente eventual de las contradicciones del sistema de dominio, o de iniciativas microsociales reactivas compitiendo entre sí, sería demasiado costoso en tiempo y en pérdida de vidas y recursos.

A la nueva cuestión social se ha respondido con más –tradicionales o (real o cosméticamente) nuevas- políticas sociales. Pero la “cuestión social” no es meramente

¹ Los trabajos incluidos en esta recopilación pueden ser leídos con independencia entre sí, o en el orden en que han sido presentados, básicamente cronológico, salvo algunas excepciones que favorecen su lectura como un texto continuo. No incluyen todos los artículos o ponencias de nuestra autoría sobre estos temas en ese período, pero otras ideas que se entrecruzan con éstas pueden encontrarse en dos compilaciones adicionales, con las cuales conforma una suerte de trilogía. Ellas son: Descentralización y política: en busca de un sentido popular, FLACSO-Ecuador, Quito (en prensa) y Desarrollo Local y Economía del Trabajo, ESPACIO, Buenos Aires (en prensa) y CIUDAD, Quito (En prensa).

² Ver: José Luis Coraggio y Rosa María Torres, Transición y Crisis en Nicaragua, DEI, San José, 1987. Allí se hacía expresa referencia a “las dificultades para reconocer la economía de sobrevivencia de las masas” por parte de la dirigencia sandinista.

³ Para completar una crítica a la política social neoliberal y afirmar la posibilidad y necesidad de adoptar una perspectiva popular para generar propuestas alternativas eficaces, ver Coraggio, José Luis, (1991) Ciudades sin rumbo, Ciudad, Quito, y (2000) Política Social y Economía del Trabajo. Alternativas a la política neoliberal para la ciudad, Buenos Aires, Quito, Miño y Dávila. Visitar también el sitio www.urbared.ungs.edu.ar

social ni puede encararse masificando las “políticas sociales” tradicionales. Ni focalizando recursos en los más pobres entre los pobres para usar mejor los recursos públicos, ni reactivando la beneficencia de los ricos. Criticar y superar las funciones de una política social centrada en la gobernabilidad y el control al menor costo posible, requiere recuperar el derecho de los ciudadanos en general y de los trabajadores en particular, a incidir -directamente y no sólo mediante la reivindicación y la protesta- sobre las estructuras económicas, haciendo que la justicia social resulte de su funcionamiento y no como alivio dosificado por la política “realista”.

Requiere también creer y demostrar que otro estilo de hacer política es posible, y que la cultura clientelar no es un dato de la naturaleza humana sino una construcción histórica que puede ser deconstruida con el fundamento de prácticas económicas más autónomas, menos alienadas. Esto no implica pasarle la responsabilidad de autotransformarse en base a la sumatoria de estrategias de sobrevivencia a la misma sociedad fragmentada que produjo el capitalismo en la periferia. Afirmamos la necesaria responsabilidad del Estado en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos discursivamente pero violados sistemáticamente en nombre de la racionalidad, supuestamente superior, de la economía de mercado. Pero sólo gobiernos radicalmente democráticos serán capaces de convocar a la sociedad para definir y gestionar colectivamente el rumbo deseado de economías y sociedades con una estrategia compartida que pautе valores y prácticas que respondan a una racionalidad sustantiva, centrada en la reproducción con dignidad de la vida de todos. Ello implica tener como objetivo estratégico sociedades mucho más igualitarias, con diferencias moralmente admisibles y democráticamente validadas como legítimas.

Una propuesta que se va consolidando a lo largo de los trabajos es que las políticas sociales -pobremente compensadoras del empobrecimiento producido por el mercado capitalista liberado de límites políticos y morales- sean resignificadas como *políticas socioeconómicas, cuyo objetivo sea facilitar y promover activamente –desde Estado y sociedad- otro desarrollo, integral e integrador, a partir de la economía popular.*⁴ Porque el cumplimiento de los derechos humanos al que se obligan los Estados requiere no sólo la aplicación consecuente del principio de redistribución desde el Estado, sino el desarrollo de nuevas estructuras socioeconómicas con dinámica propia, basadas en el trabajo, que sean *por sí mismas* equitativas y contrarrestantes de la reestructuración capitalista que subyace esta nueva onda de globalización económica.

Admitir esta posibilidad implica comprender que la economía que construyó el neoliberalismo en estas décadas es resultado de la política, y no un desarrollo natural necesario al que debemos adaptarnos so pena de caer en el caos. Caos y anomia es lo que experimentan hoy millones de latinoamericanos en su vida cotidiana. El mismo sistema capitalista global tiene que admitir y alentar (como parte de su estrategia de gobernabilidad y control) la existencia de formas alternativas de organización económica, dada su renuncia a limitar la acumulación y legitimarse mediante la integración en condiciones siempre mejores al trabajo asalariado.

En esto es fundamental advertir que el problema no ha sido tanto la subordinación que se ha venido dando de los criterios políticos y sociales a los económicos (lo que recurrentemente aparece como economicismo y una aparente confrontación entre el

⁴ Una política “socioeconómica” parte del reconocimiento de que los modelos económicos de la disciplina “economía” son representaciones muy parciales y abstractas de la economía real, y que valores, relaciones de poder así como las formas de vida y otros rasgos culturales, incluidas las relaciones sociales y comunicativas, son inseparables de esa economía real.

“frente social” y el “frente económico” en los gabinetes de gobierno), sino que tanto la economía como la política y la sociedad (y las políticas sociales) están hoy invadidas acriticamente por esa institución omnipresente denominada mercado libre.⁵

La “línea de la pobreza” es definida mediante el cálculo de los niveles de ingreso monetario y capacidad de compra que se requerirían para integrarse como ciudadano consumidor con acceso a una canasta de bienes y servicios que resulta de la estrategia histórica de empresas privadas y del estado para generar necesidades concretas, en el contexto de la lucha reivindicativa de los trabajadores. Se cuentan y agrupan quienes están por debajo o por encima de esa delgada línea entre estratos sociales. Y se estigmatiza e institucionaliza a la pobreza, vista como un problema de los pobres, no del sistema que reproduce en esta región las sociedades más desiguales del plantea.

Pero la línea que debe trazarse en esta gran tarea de transformación que nos espera no es la que agrupa a los que la sociedad y el Estado definen como pobres, sino que es una *línea político-cultural*, que en sus inicios pone del mismo lado a trabajadores (ocupados o desocupados) de los sectores pobres y de los sectores de ingresos medios que participan de valores afines a propuestas de cambio estructural, si es que no de una utopía de otra sociedad más igualitaria, más justa, con otra racionalidad. Justamente, lo que la focalización neoliberal propuso fue redistribuir recursos públicos entre los sectores medios, e incluso los pobres, y los indigentes, generando una fractura por intereses inmediatos en un amplio campo popular que, salvo en contadas ocasiones como la convergencia entre caceroleros y piqueteros durante la crisis manipulada de salida de la convertibilidad, sólo puede constituirse como sujeto político desde un proyecto creíble de otro desarrollo social integrador.

Para que de ese campo popular (el de las mayorías, el de los trabajadores, que dependen de validar sus capacidades de trabajo para vivir), surja eventualmente un proyecto eficaz de desarrollo o transformación societal que indique el rumbo para toda la sociedad, es necesario que los trabajadores ganen autonomía relativa en su reproducción material y cultural. Tanto por razones sociales como políticas, es preciso que los trabajadores constituyan una economía propia capaz de reproducirse y desarrollarse dentro de una economía mixta en transición, desde donde puedan vincularse en otra relación de fuerzas con la economía del capital y la economía pública, y participar de la constitución de sujetos de alcance nacional, latinoamericano y global.

En las sociedades modernas, tal opción es prácticamente imposible para el estrato separado de los pobres o los indigentes. Para ser dinámica y creíble como alternativa duradera, la economía popular debe transformarse ella misma, articulándose e incluyendo componentes sociales, organizativos y tecnológicos heterogéneos pero complementarios. Debe incorporar, por ejemplo, al sistema público educativo y de investigación tecnológica, a las ONGs históricas y a los profesionales y técnicos; a medios de comunicación masiva; a los movimientos de derechos humanos, los movimientos reivindicativos barriales y sindicales, de la juventud, de liberación de la mujer, de lucha por la vivienda o la tierra, de usuarios de servicios públicos; a movimientos con fundamentos político-ideológicos congruentes, como las comunidades cristianas de base, los movimientos antiglobalización, los movimientos ecologistas; a movimientos de economía solidaria, comercio justo, consumo responsable; a movimientos étnicos y movimientos culturales

⁵ Para un ejemplo de cómo esto opera en la política educativa, ver: Coraggio, J.L. (1997) “**Las propuestas del Banco Mundial para la educación: ¿Sentido oculto o problemas de concepción?**”, en José Luis Coraggio y Rosa María Torres, (1997) *La educación según el Banco Mundial. Un análisis de sus propuestas y métodos*, Buenos Aires, Miño y Dávila-CEM.

como el de educación popular, etc. Debe incluir tanto redes de subsistencia e intercambio solidario de bienes y servicios, como redes de intercambio cultural y científico, y requiere de promotores cooperativos que acompañen o impulsen iniciativas dentro de una estrategia compartida.

En esto es fundamental que los profesionales superen el disciplinarismo y la pretendida división del trabajo de intervención entre quienes se dedican a promover “lo económico”, y los se ocupan de aliviar “lo social”. El trabajo que los profesionales de la intervención social hacen, si lo hacen bien, no es nunca meramente social, es socio-político, socioeconómico y supone participar en una lucha cultural. Así, en la medida que ayuden a que los sectores populares puedan priorizar y resolver con mayor autonomía sus necesidades inmediatas, que propongan estructuras y mecanismos autosustentables y que no se limiten a administrar la distribución más eficiente de programas focalizados en los indigentes, “se estarán metiendo” con la economía.

Como se afirma en los trabajos de este volumen, pugnar eficazmente por la autonomía supone afirmar que otra sociedad es posible, superando el paradigma neoliberal que justifica la brutal desigualdad social y propone como paliativo la mera masificación y focalización a bajo costo de la asistencia compensatoria. Por más que ésta es indispensable y nunca será totalmente prescindible pues puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de personas en condiciones de alta vulnerabilidad, o evitar una degradación irreversible de las bases biológicas y anímicas de personas y grupos, es inaceptable dejar en manos del mercado capitalista el núcleo de la gestión de los recursos y las necesidades.

II. De la emergencia a la estrategia

Para empezar a construir una alternativa, es fundamental reconocer la negatividad y permanencia de esta realidad económica. No esperemos ya que la economía de mercado se remonte, que haya crecimiento con derrame y llegue la noticia de que se acabó la crisis de reproducción de la vida. Si quedan librados a la inversión de capital, los dos dígitos de desocupación en la Argentina -reales o disimulados a través de la inclusión como ocupados a los beneficiarios de planes de subsidios con contrapartida laboral- van a estar con nosotros por mucho tiempo. Debemos hacer algo específico para modificar la economía desde el trabajo (que no es lo mismo que el empleo).

Trabajar por otra economía y hacerlo fortaleciendo comunidades socialmente heterogéneas capaces de generar las bases de su propia reproducción implica, como profesionales de la política social, desarrollar capacidades que a lo mejor no tenemos. Implica aprender a trabajar, desde lo local, por el desarrollo de microemprendimientos, asociaciones, redes de ayuda mutua, cooperativas, encadenamientos productivos, redes de financiamiento. Implica conocer los mecanismos y procesos que regeneran la pobreza y acumulan riqueza en pocas manos y participar en la elaboración de propuestas para las políticas públicas en todos los niveles y sectores.

Supone también tomar distancia y comprender los mecanismos que generan la parálisis del pensamiento propositivo, el pesimismo y el cinismo ante el genocidio social, y por qué y cómo hay que cambiarlos a través de las prácticas reflexivas, el aprendizaje colectivo y la acción política. Tenemos que esforzarnos por contribuir a dar respuesta a los problemas cotidianos a la vez que planteamos una utopía, a la vez que planteamos

caminos realistas para avanzar en otra dirección cuando el juego de fuerzas es desfavorable al campo popular.

Pero la respuesta ante la emergencia no puede sustituir a la estrategia. Quienes han atendido a una población golpeada por un desastre natural saben que, temporalmente, todas las relaciones sociales cambian, se reorganiza el espacio público y el privado, surgen situaciones de solidaridad así como situaciones de violencia y corrupción. Pero la nueva cuestión social nos plantea una situación que no es pasajera sino estructural, y eso hace que, por responsabilidad, ya no se pueda dar una respuesta a las emergencias que no esté enmarcada en una perspectiva estratégica de transformación social en el mediano y largo plazo.

Ese pensamiento estratégico es fundamental, implica pensar no sólo en grupos de personas y en sectores particularmente afectados, sino en la totalidad. Implica ubicarse frente a la así llamada globalización; implica plantear propuestas alternativas y ubicarse proactivamente con respecto a las grandes políticas nacionales; implica advertir que estamos atravesados por una lucha político-cultural en la que se despliegan fuerzas de dimensión y coalescencia muy variada y variable. Y que los tiempos de la emergencia no deben impedir reinstalar en el imaginario social los tiempos del cambio estructural, el tiempo intergeneracional.

III. Del sector informal a la economía del trabajo

A lo largo de ese período, y a medida que avanzábamos en la elaboración, se fue dando un movimiento conceptual que sigue esta secuencia: crítica al concepto empiricista de sector informal urbano (SIU) \Rightarrow economía popular urbana \Rightarrow variantes de economía social y solidaria \Rightarrow economía del trabajo.⁶

En efecto, a fines de los 80 se solía usar como sinónimos “economía informal” y “economía popular”. Todavía hoy, investigadores de otros continentes pueden caracterizar la economía informal como la base latinoamericana para el desarrollo de una nueva economía social⁷. Sin embargo, aún para las más diversas definiciones del sector informal, hay muchas actividades a las que les cabe ese adjetivo que son propias de la economía capitalista o de la economía criminal y, por otro lado, buena parte de la economía popular es formal. Por eso, desde un inicio rechazamos la identificación entre economía informal y economía popular. Esto es más claro en la actualidad, cuando la precarización del trabajo viene siendo avalada por las leyes de desregulación del mercado de trabajo.

⁶ Aparte del marco para los trabajos empíricos realizados en Nicaragua, no publicados (puede verse una referencia en "Comunicación y representación popular: el caso de la Revolución Sandinista", Papers on Latin America, N° 36, The Institute of Latin American and Iberian Studies, Columbia University, Nueva York, 1994), nuestra primera publicación sobre el concepto de economía popular urbana fue "Política económica, comunicación y economía popular", Ecuador Debate, CAAP, 17, Quito, 1989, incluido en: José L. Coraggio, Ciudades sin Rumbo. Investigación urbana y proyecto popular, SIAP-CIUDAD, Quito, 1991.

⁷ Fonteneau, B. ; Nyssens, M. ; Fall, Abdou Salam (2001). "El sector informal : ¿crisis de las prácticas de la economía solidaria?" . En: Defourny, J., Develtere P. y Fonteneau, B. (comps.). La economía social en el norte y en el sur. Buenos Aires : Corregidor, Cap. 7. p. 241-272.

El concepto de economía popular tenía diversas tonalidades (desde la economía de la solidaridad hasta las organizaciones económicas de los pobres)⁸ cuando intentamos explicitarlo teóricamente a partir de la matriz de la economía de las unidades domésticas y del concepto central de fondo de trabajo. Esto implicó, desde el inicio y por los desarrollos conceptuales posteriores, proponer varios desplazamientos: (a) la unidad de análisis principal dejaba de ser el microemprendimiento -con un alto grado de trabajo familiar, informal, considerado ineficiente, pero visto como antecedente posible de organizaciones empresariales- para pasar a ser el hogar o la unidad doméstica; (b) asociado a lo anterior, la lógica del emprendimiento no podía ser descifrada desde el objetivo, considerado natural de toda organización económica, de la maximización del lucro, sino desde la lógica de la reproducción de la vida de los miembros de la unidad doméstica; (c) el trabajo asalariado, usualmente contabilizado como parte de la economía capitalista o estatal (sobre todo en caso de ser formal o de respetar las leyes laborales y de seguridad social), pasaba a ser visto como una de las formas de realización del fondo de trabajo de las unidades domésticas de los trabajadores; (d) el sesgo de clase pasaba de la economía de los pobres a la economía de los trabajadores, incorporando así un amplio espectro social y con ello sus contradicciones, pero también sus recursos y potencial; (e) el paradigma de política pública pasaba de ser orientado al alivio de la pobreza extrema y la apuesta a la emergencia de una nueva clase de microempresarios privados competitivos, a ser el de Desarrollo Social integral e integrador solidario, es decir, incluyente.

Efectivamente, a la política y los programas sociales, ya se había ido incorporando el estímulo a la producción por propia cuenta y riesgo, mediante los programas de desarrollo de microempresas, ubicados en una zona gris entre política social y política económica. A la propuesta de neoliberales como Hernando de Soto⁹ y de la banca internacional puesta a reestructurar nuestras sociedades según el prototipo de la empresa privada y la competencia, respondieron corrientes acuñadas en otros valores humanos, proponiendo desarrollar organizaciones económicas basadas en lazos de solidaridad y cooperación.¹⁰ Por momentos, para esas corrientes tanto el estado como el mercado eran vistos como mecanismos alienantes que debían ser evitados, y la economía de los pobres aparecía idealizada como realidad o como posibilidad. Diversas versiones de economía social, solidaria, o de nueva economía social y solidaria fueron tomando forma. Las propuestas alternativas no siempre se diferencian por su nombre, pero incluyen variantes como economía popular, economía social, economía solidaria, empresa social, economía de comunión, etc. la mayoría de ellas centradas en los emprendimientos, aislados o en redes de cooperación o intercambio, considerados como organizaciones “económicas”, basadas en relaciones de parentesco o en la asociación libre de individuos, pero siempre separables de la economía doméstica (basta recordar las concepciones empresariales del movimiento cooperativista).

En nuestro caso, propusimos distinguir entre la economía popular realmente existente -magnética, en buena medida salvajemente competitiva por las condiciones de apenas sobrevivencia, con recursos limitados, desarticulada, subordinada a la lógica del capital y de la política del Estado capitalista- y la propuesta de articulación de un sector de economía centrado en el trabajo, con un fuerte componente asociativo, de alta calidad

⁸ Razeto, Luis, (1995) “Las organizaciones económicas populares. Más allá de la subsistencia”, Programa de Economía del Trabajo, Santiago.

⁹ Ver: De Soto, Hernando (Ed.); Schmidheiny, Stephan (Ed.). (1991) Las nuevas reglas del juego : hacia un desarrollo sostenible en América Latina. Bogotá : Oveja Negra ; FUNDES y De Soto, Hernando (1987) El otro sendero : la revolución informal. Colombia : Oveja Negra.

¹⁰ En América Latina se destaca la contribución pionera de Luis Razeto, Op Cit.

tecnológica y con alta eficiencia socioeconómica, democrático en su gestión y orientado a nivel micro por la reproducción de la vida de sus miembros y a nivel societal por la reproducción de la vida de todos. Y afirmamos que ese proyecto requería la creación de mercados -regulados por otros principios- tanto como la acción pública promotora y facilitadora de esta economía alternativa a través de la producción de bienes públicos. Al definirla como “Economía del Trabajo”, indicábamos que su lógica era contrapuesta a la lógica de la Economía del Capital, y afirmábamos la hipótesis de que su objetivo era tan fuerte e ilimitado como el del capital: la reproducción ampliada de la vida, concepto no reducible a la visión consumista y cosificadora de las necesidades y sus satisfactores. La solidaridad se presentaba como una condición objetiva del bienestar propio antes que como un valor a priori asumido subjetivamente mediante una conversión ideológica.

IV. De las políticas sociales a la política socioeconómica

Otra línea que aparece en los trabajos sigue esta secuencia de ideas: reconocimiento de la economía popular urbana como economía de producción/reproducción ⇒ resignificación de las políticas sociales como recurso para el desarrollo de la producción popular ⇒ crítica a las nuevas políticas sociales asistencialistas que ven la producción como cuestión de la economía y la carencia como cuestión social ⇒ propuesta de integrar las políticas sociales y económicas como políticas socioeconómicas.

Hay una crítica consistente a las políticas sociales, que impuso en los 90's el economicismo neoliberal, representado, entre otros, por los organismos financieros internacionales y sus condicionalidades. Focalizadas en los más pobres, usando los sentimientos morales para desestructurar la cultura de derechos sociales generalizados, esos programas pretendían compensar las situaciones más extremas de pobreza -y luego exclusión- que generaban sus políticas económicas, presentadas como administración responsable y desinteresada de la economía de mercado.

Propusimos, ya desde discusiones iniciales en Ecuador a fines de los 80, romper con la diferenciación entre políticas sociales y económicas, planteando la necesidad de pensar políticas socioeconómicas, evitando a la vez que el campo de la intervención social fuera colonizado por los criterios de la economía neoliberal.

Para enfrentar al programa de legitimación del poder de las elites políticas y económicas era necesario reafirmar el desarrollo pleno de la ciudadanía y la efectivización de sus derechos (algo tecnológica y económicamente posible) pero hacerlo en base al desarrollo de bases propias de reproducción material evitando la dependencia clientelar, es decir, generando nuevas estructuras económicas con otras relaciones sociales (tecnológicas, organizativas, de apropiación) orientadas no por la ganancia privada sino por la reproducción ampliada de la vida de todos.

Esto planteaba, en lo que se anticipaba como una larga transición, una lucha cultural por la democratización del Estado y la conformación de una economía mixta con tres sectores: *empresarial capitalista, economía pública, economía popular en proceso de devenir economía del trabajo*, redefiniendo los términos del intercambio entre ellos de modo que finalmente fuera hegemónico el proyecto centrado en el trabajo y la vida. No se trataba, entonces, de generar una economía de sobrevivencia en las catacumbas del imperio, sino de construir otro sistema económico. Ello requería ir generando o resignificando nuevas instituciones económicas (como el caso de las monedas locales y

las redes de intercambio solidario, más conocidas como redes de “trueque”) y recuperar tanto las instituciones de la economía social tradicional (redes de ayuda mutua, cooperativas, asociaciones libres, comunidades basadas en afinidades de identidad) como los espacios públicos de decisión y acción colectiva participativa, en particular los ámbitos locales, con o sin presencia del Estado.

Agradecimientos

Quiero reconocer el apoyo brindado al desarrollo de las ideas contenidas en este libro por parte de las diversas instituciones y colegas con los que he trabajado durante los últimos veinte años, principalmente la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), creada por Xabier Gorostiaga en Nicaragua, el Centro de Investigaciones CIUDAD y FLACSO en Ecuador, y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) en Argentina. Fue asimismo importante el estímulo de instituciones y personas que me invitaron a presentar estas ideas ante públicos diversos. Los diálogos y procesos compartidos con mi compañera Rosa María Torres contribuyeron a orientar estos trabajos, en particular a que se dirigieran a los actores sociales y no sólo al mundo académico. Adriana Clemente fue la inspiradora de este proyecto de recopilación, pensada como material para la formación de los profesionales y agentes de una nueva política socioeconómica. Inés Arancibia contribuyó con entusiasmo a rescatar, seleccionar y revisar los trabajos recopilados, sugirió adecuaciones e hizo una lectura de conjunto que permitió identificar los hilos conductores de esta presentación y del epílogo.